

CONCERTAR ES DIFÍCIL

La política chilena en la encrucijada: post pinochetismo o sociedad democrática.

MANUEL ANTONIO GARRETON

Es sabido que, a diferencia de otras situaciones post dictatoriales, en Chile todos los gobiernos han estado en manos de una coalición de partidos de centroizquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por el Partido Demócrata Cristiano (DC), principalmente, el Partido Radical Social-Demócrata (PRSD), en el centro, el Partido por la Democracia (PPD), de orientación progresista y el Partido Socialista, más clásicamente de izquierda. Los dos primeros presidentes fueron demócrata cristianos (Patricio Aylwin, 1990-1994 y Eduardo Frei, 1994-2000) y los dos siguientes, un socialista, Ricardo Lagos (2000-2006) y una del PPD, Michelle Bachelet (2006-2009).

Esta coalición ha sido extremadamente exitosa, en primer lugar electoralmente, ganando todas las elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales (con la excepción de la primera vuelta presidencial de 2005, en la que la candidata Bachelet obtuvo menos votación que la suma de los dos candidatos de la derecha, aunque este resultado se revirtió en la segunda vuelta). En segundo lugar, en la administración del gobierno, tanto en lo que se refiere a indicadores de crecimiento y desarrollo económico, como los de tipo social —con una tendencia sostenida a la superación de la

pobreza—, los de infraestructura, modernización e integración mundial (pese a una debilidad en la dimensión latinoamericana, que recién intenta corregirse). Quizás, además de la oposición de derecha, sea este mismo éxito el que limitó a la coalición en su capacidad transformadora para evitar riesgos electorales, lo que puede



1991 - obra Tinta # 01 - FGD

explicar en parte por qué no se resolvieron o sólo se resolvieron parcial y tardíamente, problemas tan fundamentales como la vigencia de una institucionalidad no democrática, expresada básicamente en la Constitución de 1980 y su normativa derivada, el predominio de los poderes fácticos, la ausencia de canales de participación ciudadana y, sobre todo, las desigualdades socio-económicas.

Pese a la existencia episódica de conflictos internos, que a veces han podido llegar a situaciones relativamente críticas y a que se han acentuado en el gobierno de Bachelet, lo que llama la atención de cualquier analista político es la estabilidad de la coalición y su unidad de diecisiete años. Lo cierto es que cuando tal unidad se ha visto resquebrajada, ello se ha debido principalmente a la discusión de los cupos electorales, en el marco del perverso sistema binominal, los nombramientos en el Ejecutivo y las cuotas ministeriales y de otros cargos, así como el deslindamiento de responsabilidades, errores o denuncias respecto de alguna política pública como, por ejemplo, la crisis producida por el proyecto Transantiago, que buscaba resolver el problema del transporte público en la capital.

Hacia finales del 2006, se produce un conflicto importante en el PPD, y en el 2007 otro en la DC, ligados, al menos en el discurso, tanto a los hechos de corrupción en algunas reparticiones públicas, como a las políticas de transporte mencionadas, que marcan un nuevo tipo de problema en la coalición. El primero significó el abandono del partido de un senador y un ex presidente del partido, acompañados de un número pequeño de militantes pero con un enorme impacto mediático, promovido por la prensa de oposición que veía aquí la oportunidad de división de la Concertación. Este grupo intenta crear un nuevo referente político fuera de la Concertación, pero su futuro es muy precario. El segundo consistió en la votación en contra de un importante proyecto del Ejecutivo por parte de un senador ex presidente de la DC, líder de una fracción de ese partido. La importancia de ambos conflictos, que van acompañados, además, de recriminaciones entre los diversos componentes de la coalición es que, por primera vez, la Concertación aparece no contando con el apoyo irrestricto de sus parlamentarios en las votaciones, lo que obligaría a negociar proyectos fundamentales de transformación económico-social como el de previsión social o el de educación con la derecha, cediendo aspectos centrales del cambio del patrón neo-liberal heredado y, por otro lado, aparecen señales de división que apuntan

por parte de algunos sectores a su quiebre, alentados en esto por la derecha opositora.

Es a partir de esta situación que se habla de agotamiento del proyecto de la Concertación, de la necesidad de su refundación y que se tiende a predecir la probabilidad de que no habrá un nuevo gobierno en el 2009, ya sea porque no sobrevivirá para poder enfrentar unificada el proceso electoral, ya sea porque será derrotada en esas elecciones. El test más cercano para confirmar estas hipótesis serían las elecciones municipales del 2009.

A nuestro juicio, más que estas confrontaciones y conflictos —marcadas muchas veces por intereses, estrategias y protagonismos personales y grupales que tienden a desbordar a cada partido y que, por lo tanto, no pueden verse como conflictos o divisiones interpartidarias—, lo que realmente está en juego para el futuro de la Concertación son dos cuestiones. La primera es el problema de fondo y tiene que ver con la capacidad que tenga la coalición de pasar desde la época post pinochetista a la época democrática o, si se quiere, a la época del Bicentenario. Ya veremos qué significa esto. Por el momento, digamos que desde el punto de la Concertación la cuestión básica es la de su proyecto. La democratización y transformación del país para lo cual nació la Concertación, si bien han avanzado notablemente están lejos de haberse completado. En parte, porque en una medida importante se está preso de la institucionalidad heredada de la dictadura, lo que impide —y ésa es la otra parte—, la superación de la herencia del modelo socio-económico que ha sido corregido pero no reemplazado por uno de corte definitivamente socialdemócrata. Es cierto que han surgido voces desde la Concertación, y muy recientemente ha circulado un documento de un senador planteando ideas al respecto, que apuntan a ello, pero son normalmente dejadas en el olvido para evitar enfrentar lo que realmente hace falta, cual es un debate sobre el proyecto concertacionista. Si se consideran las declaraciones de la Presidenta Bachelet en el sentido a crear un Estado de protección como el horizonte o proyecto histórico actual de la Con-

certación, el gran problema es que, por un lado, ello no puede hacerse con la actual institucionalidad orgánica y normativa del Estado y, por otro, tampoco puede hacerse manteniendo la contradicción entre modelo socialdemócrata y conducción económica liberal. Se puede administrar un Estado de protección o bienestar con esa política económica pero no se le puede crear. La prueba flagrante de ello es la persistencia de las desigualdades pese a los avances en el crecimiento y en la modernización.

Para algunos sectores juveniles y sociales —e incluso, figuras importantes de la Concertación—, se hace necesario una nueva alianza política que reconstituya la izquierda clásica. Ello estaría expresado en la búsqueda no sólo de incorporar a los componentes típicos como el

Se puede administrar un Estado de protección con políticas económicas liberales, lo que no se puede crearlo.

Partido Comunista, hoy día, a diferencia de la primera década de la democracia, interesado principalmente en su incorporación al Parlamento, del que está excluido debido al sistema electoral bi-nominal, sino también a vastos sectores que permanecen al margen de la política oficial. Si bien esta opción debe ser objeto de debate hacia el futuro, no parece que una alternativa a la Concertación pueda hoy tener algún éxito en la medida en que, insistimos, es vista como una coalición exitosa en la que cada uno de sus componentes juega aún un papel fundamental e insustituible.

Pero no puede negarse que el problema de fondo a que hemos apuntado está atravesado, y en la medida que se trata de períodos de cuatro años lo está permanentemente, por la cuestión del liderazgo de la Concertación y de la sucesión presidencial. Además, los problemas encontrados por el actual gobierno han acelerado esta discusión. Los datos duros al respecto son que hay un equilibrio de fuerzas entre la DC y el bloque PS-PPD —que lo rompe a favor de este último, el PRSD— y que hasta ahora ha habido dos presidentes DC seguidos y dos Presidentes del bloque PS-PPD

seguidos, y que en la próxima elección se rompería este equilibrio. Sin duda que el candidato con mayor opción según todas las encuestas es el ex presidente Ricardo Lagos, del eje PS-PPD, pero a la DC un tercer presidente de este bloque le crea enormes problemas internos y entonces hay quienes postulan que en primera vuelta se lleven dos candidatos, lo que es probable, pero que obviamente cambia el carácter de la coalición —y sus consecuencias no han sido aún evaluadas—. No parece, pese a las renuencias para ello, que esto se pueda resolver sin un acuerdo de más de un período y con un principio pactado de alternancia y un mecanismo que permita la presentación en primarias abiertas de más de un candidato por partido.

La oposición de derecha y sus debilidades democráticas

Nos hemos referido varias veces a la oposición de derecha, conformada por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), que funcionan como una coalición opositora al gobierno denominada Alianza por Chile. Recordemos que el núcleo fundante de esta derecha, distinta de la que predominó en el siglo XX hasta los 60, es el pinochetismo, es decir, se trata de un sector político que nace como heredero de lo que se considera el proyecto u obra del régimen militar. En términos estrictos, sus conceptos, principios y mecanismos de constitución y funcionamiento no son los de la democracia, aunque hayan tenido que adaptarse a estas reglas del juego. El componente básico de su identidad es la defensa de la institucionalidad, constitucional, económico-social y en todos los planos, generada por la dictadura militar y asegurada por los enclaves institucionales presentes en la Constitución y en la normativa complementaria. En la medida en que algunos de estos enclaves han desaparecido o se han atenuado debido a las reformas constitucionales bastante tardías y parciales, durante el gobierno de Lagos, la derecha se refugia en la manutención del sistema electoral bi-nominal que exige quórumos muy altos para ser cambiado y que asegura una representación que bloquea cualquier cambio sustantivo del modelo socio-económico.

Lo dicho puede hacerse extensivo a toda la derecha, pero es especialmente aplicable al sector hegemónico de ella, constituido por la UDI. Lo cierto es que desde Renovación Nacional, de origen socio-político distinto, no ha podido surgir un liderazgo hegemónico que cambie el carácter autoritario de la derecha.

1991 - obra Tinta # 10 - FGD



Las disputas en la Alianza siempre terminan resolviéndose a favor de la UDI y a través del endurecimiento de la oposición a los gobiernos de la Concertación, que es donde encuentran su mayo punto de unidad, lo que enfatiza una dimensión básicamente atávica y obstructiva.

Sin embargo, el triunfo en primera vuelta en las elecciones pre-

sidenciales del candidato de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, que incluso votó por el No en el Plebiscito, por sobre el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, y que lo perfila como el postulante con mayores posibilidades dentro de la Alianza para las elecciones del 2009 y la muerte de Pinochet, en el 2006, abren más espacios para la refundación de una derecha con carácter democrático. Ello tiene dos límites. Por un lado, la riqueza y actividad empresarial y comu-

No parece que una alternativa a la Concertación pueda tener hoy algún éxito, en la medida en que es vista como una coalición exitosa.

nicacional, algo así como el modelo Berlusconi, del líder presidencial de Renovación Nacional y el carácter de su nueva directiva, si bien se ubica en un eje crítico y alejado de la dictadura y más proclive a la democracia, le acercan demasiado a la imagen de una derecha de los ricos y plutocrática, en una país sociológicamente más de centro- izquierda y mesocrático. Por otro lado, mientras el núcleo dirigente de la UDI sea el mismo que respaldó a la dictadura y a las violaciones de derechos humanos de la que ella es culpable, es decir, mientras su elite dirigente no haga el mea culpa que sí hicieron los militares, la derecha seguirá siendo vista como la heredera de la dictadura y no como una alternativa de futuro, lo que significa la reproducción de la situación del plebiscito de 1988 que favorece ampliamente a la Concertación.

La política en la era post-pinochetista.

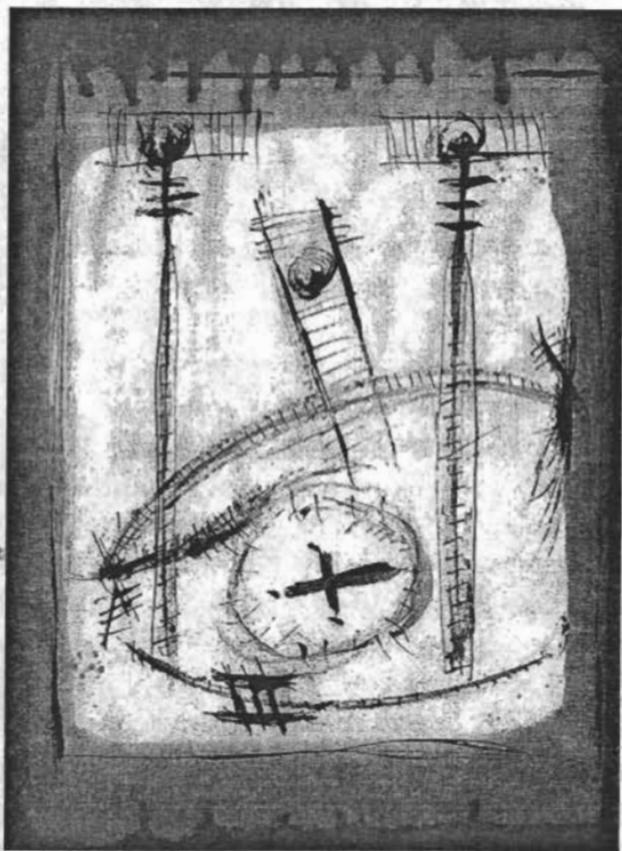
Y con esto, volvemos a la cuestión central que hemos mencionado y que caracteriza a la política chilena en los últimos 17 años. De lo que se trata —y algunos de nosotros lo hemos venido diciendo desde hace más de una década y lo hemos reiterado recientemente—, es que —caso único en la América Latina post-dictatorial— el conjunto de la institucionalidad heredada de la dictadura impide una verdadera democracia, un Estado dirigente y gobiernos que puedan cumplir con los programas para los que

fueron elegidos porque carecen de los recursos materiales y políticos, debido a los enclaves autoritarios o a los poderes de veto de minorías. Pero no sólo la institucionalidad fue pensada para un país no democrático y para un modelo neoliberal, sino que además todos sus elementos están concatenados: la ausencia de normas y recursos del sector público están vinculados a la exagerada interferencia del sector privado en la vida pública y política por la vía de los recursos económicos, del dinero. De modo que el problema debe ser atacado de raíz con una completa y coherente agenda de reforma política, que incluya las reformas constitucionales, la reforma del Estado más allá de la mera introducción de criterios de mercado y eficiencia en el sector público que lo van a distorsionar aún más, el financiamiento público de la política y el estricto control del financiamiento privado, la regionalización y descentralización, la reforma de la institucionalidad de la educación superior, la mayor capacidad técnica del Parlamento y la revisión de la institucionalidad económica por citar algunos ejemplos.

Así, hablamos de una época o sociedad post pinochetista, porque ya no es ni la dictadura o el régimen de Pinochet lo que rige el país pero tampoco el régimen o la sociedad se han sacudido de la presencia en su institucionalidad y en rasgos fundamentales de su vida social, de los legados de aquella época infame. Y de ello es especial expresión la institucionalidad heredada, partiendo por su Constitución. Pero también los actores principales y la percepción de la ciudadanía de ellos. Según muestran todas las encuestas y los análisis de predicción de votos, se mueven, aunque no sea explícitamente, en torno al eje político dictadura (asociada a la derecha) y democracia (asociado a la Concertación) y a las consecuencias económico-sociales del modelo neoliberal implantado en esa época y corregido parcialmente por la Concertación.

La presidencia de Ricardo Lagos creó enorme expectativa en torno al cambio de época, especialmente porque en sus primeros mensajes habló de una nueva Constitución y no de una simple reforma y porque él fue el artífice del discurso del Bicentena-

rio que nos vería llegar a un sociedad desarrollada. Sin negar los grandes avances modernizadores y de democratización social ocurridos bajo su mandato, el conjunto de proyectos del acuerdo entre partidos y gobierno a comienzos de 2003, que llevó a las agendas de modernización del Estado, sólo tocó algunos de los pun-



1991 - obra Tinta # 13 - FGD

tos mencionados más arriba, amarrando al Estado en materia económica en términos de intereses empresariales, no asegura el papel de éste en el crecimiento económico y definiendo su modernización principalmente en cuanto eficiencia y transparencia, sin duda necesarias pero insuficientes. Por su parte, las reformas constitucionales del 2005, si bien eliminaron algunos enclaves autorita-

rios, como la inamovilidad de los comandantes en Jefe, los Senadores designados, el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, etc., también contribuyeron a legitimar el modelo socio-económico implícito en la Constitución, no cambiaron el sistema electoral y, por lo tanto, cancelaron el debate sobre una nueva Constitución consensuada democráticamente.

A su vez, el gobierno de Michelle Bachelet, por el hecho de constituir el primer gobierno en la historia con igual cantidad de hombres y de mujeres en el Ejecutivo y anunciar un nuevo estilo de la política chilena, anunciaba también un cambio de época. Es prematura una evaluación al respecto y, sin duda que estamos frente a la posibilidad de un cambio de enorme trascendencia histórica y a una renovación de los estilos de la Concertación y, en general, de la política chilena. Si se examinan las coyunturas críticas del gobierno, como el movimiento estudiantil secundario del 2006, que planteaba como problema central la refundación de la educación chilena o los conflictos y movilizaciones en torno al Transantiago o los derivados de las denuncias de corrupción, es posible percibir que uno de los rasgos principales de este nuevo estilo es la capacidad de reaccionar atendiendo a los reclamos o demandas de la ciudadanía, pero carente de un proyecto o visión de conjunto que permita una conducción política más allá de las situaciones coyunturales y sin encerrarse en una agenda de medidas concretas y puntuales. Esta zona gris ha estado detrás de

Es necesario reformular el proyecto en términos de una nueva institucionalidad, partiendo por una nueva Constitución.

prácticamente todas las acciones del gobierno y arroja una incertidumbre respecto de la posibilidad de movilizar efectivamente al país al cambio profundo de su institucionalidad, lo que no parece estar en la agenda, y de su modelo socio-económico, lo que —salvo aspectos muy parciales de la reforma previsional anunciada— tampoco parece estar en la agenda.

El retorno de los proyectos político-ideológicos

Se hace necesario la reformulación de su proyecto en términos de una nueva institucionalidad, partiendo por una nueva Constitución, un replanteamiento del modelo socio-económico en la perspectiva de un nuevo Estado de Bienestar o de protección, lo que exige el término de una hegemonía liberal en la conducción económica, y una ampliación de las bases socio-políticas de la coalición hacia sectores ciudadanos y políticos hasta ahora carentes de participación en la política oficial. Sin duda, todo esto aumentará la dureza de la oposición de derecha, pero precisamente por ello la obligará a aparecer como lo que es, oposición de derecha minoritaria, y no alternativa posible a los errores del gobierno. Ello significa el retorno del debate y la dimensión ideológica y de sentido de la política, más allá de su carácter puramente instrumental. ■